

13 AÑOS DE DICTADURA

Sobreséidas las causas judiciales contra el general Leigh y otros militares por casos de desaparecidos

Detenciones en el homenaje a Allende ante su tumba

MANUEL DELANO, Santiago de Chile
Al menos 10 personas fueron detenidas ayer en la ciudad de Viña del Mar, a 100 kilómetros de Santiago de Chile, cuando centenares de manifestantes fueron a rendir un homenaje a la tumba del ex presidente Salvador Allende, en el 13º aniversario de su muerte. Desde la madrugada del jueves 11, el ce-

menterio de Santa Inés, donde están los restos del ex presidente, estuvo bajo una fuerte vigilancia policial. El homenaje comenzó a las 10.30, cuando dirigentes estudiantiles depositaron claveles rojos en la tumba de Allende, que se encuentra en el mausoleo de su cuñado Eduardo Grove, sin una lápida que recuerde al ex presidente socialista.

gar del dirigente del Colegio de Periodistas, Felidor Contreras, y le dijeron a sus hijas que el profesional correrá la misma suerte del periodista José Carrasco, quien fue secuestrado y acorralado a balazos. El gremio de la Prensa interpuso un recurso de protección ante la justicia por Contreras y pidió al Gobierno que se garantice la vida de todos los periodistas.

Dirigentes de todos los partidos de izquierda se reunieron en el cementerio a las 11.30, cantaron el himno nacional y guardaron un minuto de silencio.

A pesar de que la policía disolvió a los manifestantes, pequeños grupos continuaron visitando durante todo el día la tumba, depositando ofrendas florales.

La escalada represiva se mantuvo ayer, cuatro días después del atentado contra el general Pinochet. La Dirección de Comunicaciones informó que 44 dirigentes políticos y sociales están detenidos en el cuartel central de la policía de investigaciones. Según el Gobierno, están acusados "por su vinculación explícita con las acciones de violencia y subversión del orden establecido, por haberlas promovido, justificado, o haber creado las condiciones para que

aquellas prosperen". Entre los detenidos, todos dirigentes izquierdistas, se encuentra el comunista Pascual Barraza, ex ministro de Allende; los socialistas Germán Correa, del Movimiento Democrático Popular (MDP) que encabeza el Partido Comunista, y Ricardo Lagos, de la Alianza Democrática —una coalición de centro-izquierda—; y el sacerdote Rafael Maroto, portavoz del grupo guerrillero Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación por la salud de la dirigente estudiantil Andrea Palma, quien está en su sexto mes de embarazo y se encuentra también detenida.

Otras 200 personas, al menos, están siendo buscadas por la policía, según fuentes de Derechos Humanos. Todas ellas

tienen un signo común, que ahora es un peligroso estigma: o son militantes del MDP o, si no lo son, han declarado ser partidarios en la "unidad sin exclusiones" que involucra a los comunistas.

Como las tres personas que han muerto desde que se declaró el estado de sitio el lunes 8 fueron secuestradas en sus domicilios por grupos armados, quienes se saben buscados prefieren ocultarse.

Como en los primeros meses después del golpe militar de 1973, decenas de dirigentes están en la semiclandestinidad, a la espera de que pase la tormenta represiva y los efectos de la guerra que Pinochet dice que sostiene contra los marxistas.

También continúa el hostigamiento contra los periodistas. En la noche del miércoles 10, voces anónimas llamaron al ho-

Ambiente anticomunista

En este tenso ambiente anticomunista, no sorprendió que la Corte de Apelaciones decidiera echar tierra sobre el proceso que el juez Carlos Corda comenzó contra 36 miembros de las Fuerzas Armadas —entre ellos el ex miembro de la junta de gobierno general Gustavo Leigh— y cuatro civiles por su vinculación con la desaparición de diez militantes comunistas en 1976 y 1977. El fallo judicial determinó que "beneficia a los inculcados la amnistía, que surte el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido".

Washington ve dificultada la salida 'honorable' del dictador

FRANCISCO G. BASTERRA
Washington

Estados Unidos teme que el atentado sufrido por el general Augusto Pinochet y la represión desatada por éste dificulte la salida honorable del dictador chileno del poder y la democratización pactada con los militares, que la Administración de Reagan trata de conseguir en ese país del Cono Sur americano antes de que se produzca una situación como la de Nicaragua tras la caída de Anastasio Somoza.

Lo sucedido coloca en un dilema a Washington, que últimamente había decidido abandonar la diplomacia callada para aumentar las críticas del régimen de Pinochet en público, y este verano ha enviado emisarios a Santiago para expresarle al general su descontento con su intento de perdurar en el poder. Uno de ellos, el general John Galvin, jefe del Comando Sur, sugirió incluso, al parecer, que Pinochet sería bien recibido en EE UU.

De momento, el Departamento de Estado ha condenado el atentado, pero al mismo tiempo ha manifestado su preocupación por la imposición del estado de sitio. "Una medida tan extrema", dijo el portavoz estadounidense, "que obstaculiza el desarrollo del proceso de diálogo y de construcción de un consenso necesario para la pacífica transición de Chile a la democracia".

Condona blanda

Para los críticos de la Administración, como el Consejo de Asuntos Hemisféricos, esta condena es demasiado blanda y Ronald Reagan debe abandonar definitivamente su política de "compromiso constructivo" con la dictadura militar y demostrar con actos más audaces que los realizados hasta ahora que quiere la democracia en Chile.



El general Pinochet, junto a Imelda Marcos, en los funerales de Francisco Franco, en noviembre de 1975. A la izquierda de la foto, el banquero norteamericano Nelson Rockefeller.

El miércoles EE UU pidió la realización de "fuertes esfuerzos para poner fin a la violencia política", declaró que "abhorre" el asesinato del periodista José Carrasco y pidió, como hace rutinariamente en estos casos, la investigación del hecho y el juicio de los culpables.

Washington tendrá este otoño una oportunidad de convertir su retórica en hechos cuando en los organismos multilaterales de ayuda, que controla Estados Unidos, se voten 600 millones de dólares (78.000 millones de pesetas) de créditos a Chile.

El secretario adjunto de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Elliot Abrams, advirtió que la

Administración votaría en contra si Pinochet no mejoraba el respeto por los derechos humanos y daba pasos hacia la democratización.

La junta militar, teniendo un rechazo norteamericano, pidió recientemente que los préstamos no se consideren hasta noviembre, en vez de este mes, cuando estaba prevista su votación. Por otra parte, continúa adelante la preparación de las maniobras navales Unidas, que las marinas estadounidenses y chilena realizarán a finales de este mes.

El mensaje de las últimas semanas enviado por Reagan a Santiago es que ni Pinochet ni el caos son aceptables para Washington. El proceso de democratización debe

acelerarse antes de que la oposición comunista cobre más fuerza para evitar, por encima de todo, que las fuerzas de la izquierda sean predominantes en la salida de la dictadura, recuperando el papel que tuvieron en la época de Salvador Allende. La Casa Blanca preferiría ver una transición abierta por una junta militar que convocara elecciones en 1989. Pero el aumento de la violencia, la audacia y la operatividad mostrada por la ultraderecha armada y la ausencia de una clara alternativa, militar o civil, al dictador hacen dudar todavía a algunos sectores de esta Administración de la bondad de empujar demasiado al inquilino del palacio de la Moneda.